

## AMPARO.

*Juicio promovido ante el juzgado de Distrito del Estado de Morelos, por el C. Andres Saturnino, contra el gefe político del Distrito de Cuernavaca, por violacion de la garantia constitucional que otorga el artículo 16 de la Constitucion federal.*

### ESCRITO DEL ACTOR.

El C. Juez de Distrito Andres Saturnino, vecino del barrio de Cantarranas de esta ciudad, ante vd. con el debido respecto y haciendo uso del recurso de amparo, comparezco y digo: que hace veinte y un años soy poseedor de un terreno de los de repartimiento de barrio con arreglo á la ley del antiguo Estado de México de 2 de Junio de mil ochocientos treinta y cinco, sin mas gravamen que el de prestacion y por lo cual lo consideraba de mi propiedad; pero habiendo sabido que mi inmediato vecino C. Manuel Sanchez, denunció mi terreno pidiéndolo en adjudicacion, ocurrí á la gefatura política oponiéndome á la denuncia y fundado en el derecho que me concede el artículo 4º del decreto del citado Estado de México de 20 de Octubre de 1868 vigente en este de Morelos, y en el que se dispone terminantemente, que los terrenos que no estén adjudicados se les den á los poseedores; mas como á pesar de mi justa oposicion, la gefatura, sin atender á lo que manda la suprema circular del gobierno general de 9 de Octubre de 1856, de que mientras los poseedores no renuncian sus derechos, el denunciante no puede subrogarse en su lugar, con total infraccion de esta circular y del art. 4º del referido decreto, espidió el título de adjudicacion de mi terreno á favor de dicho Sanchez, acto por el cual ha violado la garantía que me asegura el artículo 16 de la Constitucion federal de 1857, puesto que no solo soy molestado en mi domicilio y posesion, sino

que el intruso adjudicatario me estrecha á que en el acto le desocupe el terreno, sin atender á que soy el poseedor y que por lo mismo en él está mi casa, árboles frutales y cercas que son de mi propiedad; por lo tanto olovo á cse juzgado la presente queja fundándola en la fraccion 1ª del artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, suplicándole se sirva mandar suspender todo procedimiento y ampararme en el goce de las garantías referidas, para que como poseedor legítimo de mi terreno quede espedido mi derecho. En tal virtud á vd. pido provea de conformidad como solicito, que así es de justicia protestando lo necesario.

Cuernavaca, Octubre treinta de mil ochocientos setenta y uno.—No sé firmar.

### *Primer Pedimento del C. promotor fiscal.*

#### C. JUEZ DE DISTRITO:

El promotor fiscal dice: que con toda atencion ha examinado el escrito de queja; el informe evacuado por la autoridad ejecutora del acto reclamado; así como tambien las leyes en que se apoya el quejoso para interponer el recurso de amparo, por haberse adjudicado al C. Mariano Sanchez, un terreno en que dice el actor tenia la posesion; y que como circunstancia de dicha adjudicacion, cree el actor han violádose en su persona la garantía que otorga al individuo la Constitucion de 1857 en su artículo 16.

Como la suspension del acto reclamados sería revocar la disposicion de la gefatura política en el caso de que me ocupo y hacer una declaracion de estar violada la garantía que señala el art. ya citado: el que suscribe para dictaminar lo concerniente, ha analizado con toda detencion el punto que está sometido á la deliberacion del juzgado del digno cargo de vd. Y por no creer que la gefatura política haya violado en el C. Andres Saturnino la garantía

señalada por haberse adjudicado al C. Sanchez el terreno que dice el quejoso poseía; pero que no ha presentado prueba alguna en su favor, ni título legal, ni aducido razones de peso para patentizar que la autoridad ejecutora, no sea competente para hacer y ordenar la adjudicación motivo de la queja:

El que lleva la voz fiscal cree, que no procede la suspensión, por las razones que tiene espuestas y que á juicio del que suscribe son legales, como también sus fundamentos en que están basadas.

Cuernavaca, Noviembre nueve de mil ochocientos setenta y uno.—Lic. J. Rondero.—Una rúbrica.

#### *Segundo Pedimento fiscal.*

El promotor fiscal dice: que la ley de 25 de Junio concedió á los arrendatarios y poseedores de las fincas sujetas á la desamortización, un derecho preferente para pedir su adjudicación; pero tanto por esa ley como por las disposiciones posteriores relativas, esa prerrogativa tenía un término fijo trascurrido el cual las referidas fincas eran denunciabiles por cualquiera persona. La misma ley establecía que cuando hubiese derechos constituidos en las fincas adjudicadas, tales como el usufructo, el arrendamiento y cualquiera otros, debían subsistir sin que en nada fuesen perjudicados por la adjudicación.

En el presente recurso de amparo, el quejoso afirma que haya hecho uso del derecho que le correspondiera para pedir la adjudicación del terreno que asegura poseía, ni se ha comprobado hasta ahora que se haya opuesto á que la adjudicación se hiciese en favor del C. Mariano Sanchez.

El artículo 16 de la Constitución federal, que se supone violado, previene en su parte relativa: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento

escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento;" y la autoridad competente en este caso es, conforme á la ley, la autoridad política y la adjudicación en nada perjudica los derechos que como usufructuario ó por cualquier otros títulos tuviese el C. Saturnino, pues esta se refiere á la propiedad que no correspondía al quejoso aunque hubiese podido pedir que se le adjudicara.

No obstante la adjudicación, el C. Saturnino debe continuar en el ejercicio de los derechos que le correspondan como poseedor, y puede deducirlos ante la autoridad competente que impedirá que sea molestado en el uso de sus derechos.

Pero si bien no se ha comprobado ni aparece violada hasta ahora garantía alguna, de los pruebas que está dispuesto á rendir el quejoso pudiera resultar comprobada esa violación, el que suscribe es de opinión que se mande abrir este negocio á prueba conforme al artículo 10 de la ley de 20 de Enero de 1859.

Cuernavaca, Diciembre 19 de 1871.—N. Medina, una rúbrica.

#### *Tercer Pedimento fiscal.*

##### **J. JUEZ DE DISTRITO.**

El Promotor fiscal que suscribe, en el juicio de amparo promovido por el C. Andres Saturnino contra los procedimientos de la gefatura política de esta capital relativos á la adjudicación del terreno del barrio de Cantarranas en que tiene el quejoso su casa y huerto, su estado supuesto, dice: que el juzgado se ha de servir declarar que no es de concederse el amparo solicitado en este recurso, pues así procede conforme á los fundamentos legales que paso á esponer.

Las constancias de autos comprueban de una manera plena, que el C. Andres Saturnino poseía el terreno mencionado; que fué denunciado por el C. Mariano Sanchez en

21 de Diciembre de 1868, ante la gefatura política, y que esta fundándose en el art. 10 de la ley de 25 de Junio de 1856, y en que no hubo oposicion de parte del poseedor, hizo la adjudicacion en favor del denunciante.

El valor de ese terreno fué fijado por la gefatura en \$181,07. cantidad excesiva segun el quejoso, y prevenido como lo está por la circular de 9 de Octubre de 1856 que respecto de los terrenos cuyo valor no pase de doscientos pesos, no debe hacerse ninguna adjudicacion ni remates sino en el caso de que los arrendatarios con consentimiento de las disposiciones dadas en beneficio suyo, renunciaren espresamente sus derechos, haciéndose constar precisamente en la escritura para evitar todo fraude, que intervino esa renuncia: es indudable en mi concepto, que en el caso presente se infringieron las prescripciones de esa circular incurriendo el particular denunciante y la autoridad ejecutoria en la responsabilidad que ella conmina con hacer efectiva.

¿Pero hubo violacion de las garantías individuales? El quejoso afirma que con esos procedimientos se violó la garantía que otorga el art. 16 de la Constitución de la República, que previene: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Muy frecuentes bajo los gobiernos absolutos y durante nuestras revueltas políticas, los cateos, las detenciones las escacciones de todo género y las prisiones arbitrarias, verificadas no solo por las autoridades sino aun por individuos que tomaban su nombre; la prescripcion constitucional tuvo por objeto poner un dique á la arbitrariedad é impedir para lo sucesivo esos abusos. Se refiere por consiguiente á las molestias sufridas en la posesion, y no á la expropiacion ni ocupacion de la propiedad de que trata el artículo 27. Pues bien, en el caso presente la gefatura polí-

tica era la competente para hacer la adjudicacion y otorgar la escritura del terreno conforme á la ley de 25 de Junio ya citada y de la validez de sus actos y legalidad de sus procedimientos deberá tratarse en otro juicio y ante otra autoridad diversa del Juzgado de Distrito.

Si la adjudicacion vulnera los derechos del C. Saturnino, no lo espropia del terreno, supuesto que aun no le pertenecia, porque hasta ahora no se le ha adjudicado; y podría reivindicar los derechos que le competen pidiendo que se declare nula la adjudicacion hecha al C. Sanchez en 14 de Octubre último por estar comprendida en la prohibicion de la circular citada. Si tenia derechos adquiridos como superficiario, poseedor ó arrendatario del terreno, deben considerarse como subsistentes esos derechos y no serán perjudicados por la adjudicacion; y en el caso de que se intentara menoscabarlos, podrá defenderlos en juicio alegando ademas de la nulidad de la adjudicacion, las prevenciones espresas de la ley, que reservó esos derechos.

Dice tambien el C. Saturnino, que es molestado en su posesion porque el adjudicatario le exige la desocupacion del terreno; pero no podrá obligarlo á verificarla sino la autoridad judicial que tendrá presentes sus derechos y decidirá sobre su subsistencia.

El C. Saturnino no puede considerarse como molestado en su posesion por la gefatura política, ni tampoco como expropiado, pues repito que la adjudicacion no se ha hecho hasta ahora á su favor á pesar de que deben considerarse como subsistentes aun sus derechos para pedirla. Además, no puede ponerse en duda la competencia de la gefatura para hacer la adjudicacion, y sus determinaciones relativas fueron escritas y fundadas, debiendo este juzgado considerarlas subsistentes mientras no haya determinado su nulidad la autoridad á quien corresponde hacerlo.

Las gestiones particulares del adjudica-

tario relativas á la desocupacion, no deben considerarse ni se les puede dar el carácter de las prohibidas por el artículo constitucional; pero en todo caso, no serian procedimientos de la gefatura, autoridad contra quien se solicita amparo en este recurso.

El que suscribe, que ha tenido presente al examinar la procedencia de este recurso las prescripciones todas de la Constitucion, vé de una manera palpable que la gefatura política infringió la circular porque debiera regirse; pero no encontrando que se haya violado alguna de las garantías individuales, se vé en el caso de suplicar que el juzgado determine de conformidad con su petición del principio, que repite por conclusion.

Cuernavaca, Enero nueve de mil ochocientos setenta y dos.—*Nicolas Medina*, hijo.—Una rúbrica.

#### *Sentencia del C. juez de Distrito.*

Cuernavaca, Enero veintidos de mil ochocientos setenta y dos.

Visto este juicio de amparo que promovió el C. Andrés Saturnino, contra la gefatura política del Distrito de Cuernavaca por la adjudicacion que hizo esta autoridad al C. Mariano Sanchez de un terreno de repartimiento del que estaba en posesion el quejoso, alegando que con este acto se violó la garantía que otorga el art. 16 de la Constitucion: vistos los informes de la autoridad responsable; las pruebas rendidas por el actor y su alegato; lo pedido y alegado por el ministerio fiscal; la citacion para sentencia, y cuanto de autos consta.

Considerando: que la gefatura política al expedir el título de adjudicacion del terreno en cuestion, obró en uso de las facultades concedidas por la circular de 9 de Octubre de 1856; que si ha habido infraccion de esa circular y del decreto del Estado de México de 20 de Octubre de 1868

en el procedimiento, no respetando la posesion, la parte que se dice agraviada por esa irregularidad tiene sus derechos á salvo para deducirlos ante los jueces que para contiendas de esa naturaleza, tienen por las leyes de desamortizacion facultad de dirimir las; pero no para entablar una queja con ese motivo por violacion de garantías individuales; que la parte actora no ha justificado haberse opuesto á la adjudicacion, en cuyo caso, decidida la excepcion por la autoridad política ó estando pendiente de resolverse por la judicial una vez interpuesta, si la autoridad política hubiera embargado ó secuestrado el terreno poseído por el quejoso, podria decirse que era molestado en sus posesiones por autoridad incompetente y tal vez sin causa legal; que el objeto del artículo constitucional que se invoca es, poner al abrigo de los atentados de las autoridades, la seguridad individual de las personas, familias, domicilio, papeles y posesiones; y en consecuencia, si el adjudicatario por sí y ante sí con el título de adjudicacion perturba al quejoso en la posesion del terreno de repartimiento que ha acreditado, con citacion del C. promotor, tener hace 20 años; como, que ese acto no es efectuado por persona que tiene autoridad pública, no puede servir de fundamento para pedir la proteccion de la justicia federal, porque los tribunales de la federacion solo resuelven las controversias á que se dá el nombre de juicios de amparo, por leyes ó actos de cualquiera autoridad que viole las garantías individuales.

Considerando por último: que no ha habido temeridad á juicio de este juzgado por parte del actor, y que su insolvencia es notoria, á nombre de la soberanía nacional, con fundamento del art. 16 de la Constitucion de 57, ley de 20 de Enero de 69 en sus artículos 1º, fraccion 1ª, 2ª, 13ª, 16ª y 27ª, y de conformidad con lo pedido por el C. promotor, debia decretar y decreto:

Primero; La justicia de la Union no ampara al C. Andrés Saturnino contra la ad-

judicacion que hizo la gefatura política de este Distrito en favor del C. Mariano Sanchez, por no haberse violado con ese acto la garantía que reconoce la Constitucion en su art. 16º

Segundo; No se impone multa alguna á la parte que promovió este juicio.

Tercero; Publíquese por los periódicos, y

Cuarto; remítanse las actuaciones á la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos para su revision. Así definitivamente juzgando lo decretó el C. Lic. Felipe Lopez Romano, juez 1º suplente de Distrito que actua por licencia del propietario y firmó. Doy fé.—*F. Lopez Romano.*—Una rúbrica.—*José Anastacio Rego*, secretario.—Una rúbrica.

*Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Marzo veinticinco de mil ochocientos setenta y dos.

Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado de Distrito de Morelos por el C. Andres Saturnino contra el gefe político del Distrito de Cuernavaca, quien adjudicó al C. Mariano Sanchez un terreno llamado "Capalhuscon" en el barrio de Cantarranas, y considerando: que en el expediente consta, que Andres Saturnino ha poseído ese terreno desde el año de 1851 y lo ha tenido en arrendamiento como terreno de repartimiento; que la adjudicacion que de él se hizo Sanchez se verificó sin noticia del quejoso y sin que hubiese renunciado expresamente del derecho de adjudicárselo: que el decreto de 20 de Octubre de 1868 expedido en el Estado de México, y vigente en el de Morelos dispone en su art. 4º, que los terrenos que no estén adjudicados se den á los poseedores de ellos: que el decreto de 9 de Octubre de 1856 manda, que todo terreno cuyo valor no pase de doscientos pesos conforme á la base de la ley de 25 de Junio, se adjudique á

los respectivos arrendatarios, ya sea que lo tengan como de repartimiento, ya pertenezca á los ayuntamientos ó esté de otro modo sujeto á la desamortizacion: que en el mismo expediente consta, que el valor del terreno de que se trata no llega á doscientos pesos, y que de lo expuesto resulta, que la adjudicacion de él al C. Mariano Sanchez es contra lo dispuesto por las leyes y por lo mismo que ataca la garantía á que se refiere el art. 16 de la Constitucion federal que dispone, que nadie puede ser molestado en sus posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, pues no puede fundarse en causa legal un procedimiento contrario á ella, se resuelve: que se revoca la sentencia pronunciada el 22 de Enero de este año, por el juez de Distrito de Morelos, que declaró que la justicia de la Union no ampara al C. Andres Saturnino contra la adjudicacion que hizo la gefatura política del Distrito de Cuernavaca en favor del C. Mariano Sanchez, por no haberse violado con ese acto la garantía que reconoce la Constitucion en su art. 16; y se decreta: que la justicia de la Union ampara y protege al C. Andres Saturnino contra el acto en virtud del que, la gefatura política de Cuernavaca, adjudicó al C. Mariano Sanchez el terreno á que este juicio se refiere.

Devuélvanse sus actuaciones al juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el toca.

Así lo decretaron por mayoría de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Juan J. de Garza.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auzá.*—*S. Guzmán.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis Maria Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Abril primero de mil ochocientos setenta y dos.—*Jac. Agustín Peralta*, oficial mayor.

## ELECCIONES.

*Causa instruida en el juzgado de Distrito de Michoacan de Ocampo, contra los individuos que formaron la mesa de la seccion 2ª electoral de Distrito de Puruándiro, por infraccion de la ley de 8 de Mayo del presente año.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

A los CC. que formaron la mesa de la seccion 2ª del Distrito electoral de Puruándiro se les ha formado causa por haber infringido la fraccion 2ª del art. 2º de la ley electoral de 8 de Mayo del año que cursa, pues que en vez de haber levantado la acta y extendido la credencial respectiva en la misma casilla, lo hicieron fuera de ella.

El hecho aparece comprobado, con la confesion judicial de los mismos reos, los cuales se disculpan con su ignorancia, tanto respecto de la ley del caso, como de la práctica para formar aquellos documentos, pues son artesanos sin instruccion en estas materias.

El defensor con una informacion testimonial que produjo ante el ciudadano juez de 1ª instancia de Puruándiro, probó tal circunstancia, y ademas, que los procesados son hombres de bien y que si procedieron á levantar la acta y demas documentos fuera de la casilla electoral, fué porque se vieron en la necesidad de ocurrir á una persona estraña que se los formase, por no saber ninguno de ellos hacerlo por sí mismo.

Como del proceso no aparece otra culpabilidad contra los reos, este ministerio pasa á hacer sus reflexiones de esta manera:

Es un precepto del derecho, que á nadie

disculpa la ignorancia de la ley; de manera, que partiendo de este principio resulta, que los procesados son verdaderamente reos de la infraccion de la ley citada, y en consecuencia acreedores á las penas que ella demarca.

Mas si puede considerarse como circunstancia atenuante la de que siendo los procesados unos artesanos sin instruccion ni práctica en la formacion de los documentos arriba dichos, hayan ocurrido á una persona estraña de fuera de la casilla para que se los formase; y tanto mas podrá considerarse tal circunstancia, cuanto que no aparece que haya habido malicia para hacerlo de la manera que se hizo.

Así es que por esto, el promotor fiscal pide: se imponga á dichos reos el minimum de la pena que establece la fraccion 2ª del art. 2º de la ley de 8 de Mayo último; y como ya la tienen sufrida en prision, se les dé por compurgados con ella.

Morelia, Noviembre trece de mil ochocientos setenta y uno.—*Mariano de Jesus Torres*.—Una rúbrica.

### *Sentencia del C. Juez de Distrito*

Morelia, Noviembre veintidos de mil ochocientos setenta y uno.

Vista esta causa instruida contra Apolinio Alejandro, Ignacio Valdovinos, Luis Tovar y Eutiquio Ramirez, vecinos de Puruándiro y miembros de la mesa electoral de la seccion 2ª de aquella municipalidad, por infraccion de la ley de 8 de Mayo de este año; las declaraciones de los acusados, las diligencias del sumario; la confesion con cargos hechas á los reos y sus respuestas; lo alegado y probado por su defensor; lo pedido por el ministerio público; la citacion para sentencia y cuanto mas convino, y

Considerando: que aunque el hecho, materia de la inquisitiva, está expresamente comprendido en la parte final de la fraccion 2ª del art. 2 de la ley citada arriba,